

Un crimen detestable

El asesinato del ex congresista y ex gobernador del Huila Jaime Lozada Perdomo ha desatado una justificada indignación. Lo asesinaron indefenso, en una emboscada, en la que se salvó uno de sus hijos. ¿Y por qué tanta indignación? Porque es la larga historia de un calvario de muerte y secuestro por el que ha tenido que pasar una familia. Mataron a un defensor infatigable del intercambio humanitario y ahora sus asesinos han convertido a la familia Lozada en símbolo del drama que padecen tantos colombianos.

La esposa de Lozada, Gloria Polanco, y dos de sus hijos, Jaime Felipe y Juan Sebastián, fueron secuestrados en la infame incursión de las Farc al edificio Miraflores de Neiva, el 26 de julio del 2001. Casi dos años después, el pago de un rescate consiguió la liberación de los muchachos el 13 de julio del 2004. Su madre, aún en cautiverio, cumple hoy 1.592 días en manos de esa guerrilla, en calidad de 'canjeable', y sin pruebas de supervivencia por dos años.

El hijo más pequeño de Jaime Lozada y Gloria Polanco, Daniel, tenía 11 años cuando secuestraron a su madre y no llegó a los 15, cuando mataron a su padre. Difícil concebir una orfandad más horrenda. Y es casi imposible imaginar un emblema más triste de la inenarrable cantidad de sufrimiento que no vacilan en imponer a la sociedad colombiana los grupos armados: matan y secuestran en nombre de unas ideas que hace mucho tiempo solo suenan a hueco cinismo. ¿Cuántos niños y cuántas familias viven, en el anonimato, un dolor idéntico al de Daniel, su madre y sus hermanos?

Quién mató a Jaime Lozada, está aún por esclarecerse plenamente. El Gobierno y los militares señalaron de inmediato a las Farc: desde Neiva, el presidente Álvaro Uribe acusó a "ese sicariato miserable que es la Farc". La zona donde fue atacado el vehículo del ex gobernador, que volvía de una reunión política en Garzón, es de tradicional influencia de esa guerrilla. Un asesinato como este, en la carretera más importante del Huila, desafía la política de seguridad democrática, y hace evidente la capacidad de las Farc de jugar políticamente en una coyuntura que quieren aprovechar. ¿Y si Lozada era defensor del intercambio humanitario y, según su fami-

lia, no había sido amenazado por las Farc, ni les 'debía' dinero, quién, distinto de las Farc, pudo asesinarlo? En todo caso, este crimen es un preocupante anticipo de la violencia que amenaza la próxima campaña electoral. Y recalca la urgencia de medidas de protección para los candidatos.

Si se trató de las Farc, no deja de ser una amarga paradoja que asesinen justo a quien se había convertido en uno de los voceros del intercambio humanitario. ¿Qué puede tener en la cabeza un grupo capaz de semejantes cosas? Sería la pregunta de cajón de confirmarse su autoría. Aunque una organización que secuestra y mata como esta, es capaz de cualquier fechoría, sin que las explicaciones de la lógica ni las consideraciones humanitarias le interesen un ápice, como lo ha demostrado en miles de ocasiones.

**Además de repudio,
el asesinato de
Jaime Lozada debe
producir un remezón
en el manejo de
la seguridad
en el Huila.**

Grave preocupación debe ser, por otra parte, la situación del Huila. Ayer, el diario *La Nación*, de esa ciudad, editorializaba, preocupado, sobre el mensaje que este hecho envía acerca de que "nuestras carreteras son inseguras y por aquí no funcionan bien las estrategias de seguridad del Estado". Varios políticos locales amenazaron con suspender sus campañas al Congreso, a lo que el Gobierno reaccionó prometiendo la instalación de una nueva Brigada, el tras-

lado de un batallón de carabineros y recompensas de 20 millones de pesos por todo miembro de la 'Teófilo Forero' capturado.

Desde el asalto y secuestro masivo en el edificio Miraflores, en Neiva, han pasado más de cuatro años, y el Huila sigue siendo uno de los departamentos más críticos y vulnerables en el embate de los grupos armados contra la política de seguridad del actual Gobierno. Ni siquiera está a salvo la principal carretera del departamento, como evidencia el asesinato de Jaime Lozada Perdomo.

Crimen tan detestable debe producir, además del más amplio repudio social de los colombianos, un remezón en el manejo de la seguridad en el Huila. Para que allí, donde todavía campea la inseguridad, se comience a recuperar la confianza de los colombianos en sus instituciones y en la esquivada seguridad que estas ofrecen a sus indefensos ciudadanos.